UNDRR
COVID-19 BRIEF

PERSONAS CON DISCAPACIDADES FRENTE AL COVID-19 EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

27 DE MAYO DEL 2020

#LaPrevenciónSalvaVidas

COVID-19
RESPUESTA

MARCO DE TRABAJO Y ANTECEDENTES

Alrededor de 85 millones de personas viven con alguna discapacidad en la región de las Américas y el Caribe. Si a ello sumamos sus cuidadores, familias y redes de apoyo, nos daremos cuenta que, directa o indirectamente, la discapacidad forma parte de las vidas de un porcentaje significativo de nuestra población. Debido a las barreras existentes en su entorno, las personas con discapacidad suelen vivir en situaciones de mayor vulnerabilidad que otros grupos sociales y ser más propensas a experimentar condiciones de pobreza o pobreza extrema.

La emergencia generada por la pandemia de COVID-19 es de tal magnitud que ha superado en gran medida la capacidad de respuesta de los gobiernos y otros prestadores de servicios. Esto afecta de manera especial a las personas con discapacidad, que se enfrentan a barreras adicionales por su forma de interactuar con el entorno y por la carencia o interrupciones de los servicios de salud, las redes de apoyo y otros servicios críticos.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los países miembros de las Naciones Unidas en el 2015 para alcanzar el resultado de "la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países". En este sentido, el documento enfatiza la necesidad de incorporar perspectivas desde un enfoque de inclusividad.

Entre otras cosas, el Marco de Sendai señala que:

- "La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. Deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. En este contexto, debería prestarse especial atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de los ciudadanos." (párrafo 19 d)

- "La reducción del riesgo de desastres requiere un enfoque basado en múltiples amenazas y la toma de decisiones inclusiva fundamentada en la determinación de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de datos desglosados, incluso por sexo, edad y discapacidad, así como de la información sobre los riesgos fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con base científica y no confidencial, complementada con los conocimientos tradicionales." (párrafo 19 g)

- "Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con discapacidad para que encabecen y promuevan públicamente enfoques basados en la equidad de género y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Los desastres han demostrado que la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, que debe prepararse con antelación al desastre, es una oportunidad fundamental para 'reconstruir mejor', entre otras cosas mediante la integración de la reducción del riesgo de desastres en las medidas de desarrollo, haciendo que las naciones y las comunidades sean resilientes a los desastres." (párrafo 32)

En este contexto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para Las Américas y el Caribe (UNDRR) y ONG Inclusiva, junto con la Red de América Latina y el Caribe para la Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad (Red GIRDD), organizaron el día jueves 23 de abril un webinar sobre las personas con discapacidad frente al COVID-19. Entre los temas analizados, se reflexionó sobre la inclusión y participación activa de las personas con discapacidad en todos los procesos de la gestión y reducción del riesgo de desastres, y se presentaron los resultados de una encuesta lanzada por ONG Inclusiva con el fin de conocer más de cerca la experiencia de las personas con discapacidad ante el COVID-19. [1]

[1] El webinar completo se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uRbGxUbS3Qc

PANELISTAS

Además de las intervenciones de sus distinguidos panelistas, el webinar también contó con servicio de interpretación simultánea a la lengua de señas y la valiosa participación de más de 230 participantes.

Los panelistas fueron:

Carlos Kaiser
Director de ONG Inclusiva, representante de la Red de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad (Red GIRDD) para América Latina y el Caribe, y punto focal regional del Grupo Temático Global (TG-DRR) para personas con discapacidad y reducción del riesgo de desastres.

Ana Lucía Arellano
Presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y Presidenta de la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA).

Angélica Monteagudo
Presidenta de Fundación Sendas, organización afiliada a RIADIS. Activista en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, en particular, mujeres y niñas.

Sonia Castro
Presidenta de la Fundación Mamá Terapeuta y Creadora de la red ‘Mamá Terapeuta’, una red de apoyo y capacitación para familias de niños y jóvenes con discapacidad que reúne a más de 15.000 familias de distintos países.

Fernando Jácome
Director de Cooperación Internacional, Ministerio de Salud de Ecuador.

Nibaldo Meza
Alcalde de la Municipalidad de Peñaflor, Región Metropolitana de Chile.

Jorge Gallardo
Cochifas Coordinador de investigación y desarrollo de ONG Inclusiva

Antony Duttine
Asesor en discapacidad y rehabilitación, Organización Panamericana de la Salud (OPS).

DESARROLLO DEL DIÁLOGO

Se plantea el contexto de la presente crisis como una triple pandemia: sanitaria, psicológica y económico-social, donde la coordinación y conocimiento de los actores son necesarios para buscar soluciones integrales. En este sentido, debemos tener presente que las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad son diferentes. Y por ello, más allá de resaltar las desigualdades y necesidades diferenciadas existentes en nuestros países, la actual crisis nos ofrece la oportunidad de replantear algunos conceptos y patrones.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) instan a no dejar a nadie atrás. Sin embargo, nunca antes como durante esta pandemia había sido tan evidente la brecha que padecen las personas con discapacidad. Así, aunque necesarias, las medidas de contención, distanciamiento social y el aislamiento personal pueden afectar gravemente a las personas con discapacidad. Por su parte, la falta de equipos de protección personal y otros insumos básicos de salud, pueden representar retos insuperables para las personas con discapacidad.

En América Latina y el Caribe, la pandemia ha puesto de manifiesto algunos de estos retos. Por ejemplo, ha quedado patente la importancia no solo de contar con cifras, datos desagregados, equipos de protección personal y servicios básicos, guías de orientación y medidas sanitarias específicas para trabajar con la población con discapacidad, sino también de garantizar los derechos humanos, el acceso a información y educación, y la dignidad para las personas con discapacidad, sus cuidadores, sus familias y sus redes de apoyo.

En suma, las barreras ya existentes han sido visibilizadas y exacerbadas por la pandemia. Las condiciones sociales y económicas de las personas con discapacidad, que generalmente las colocan en situaciones de pobreza o pobreza extrema, pueden verse incrementadas en esta crisis.

Una encuesta lanzada por ONG Inclusiva sobre personas con discapacidad y COVID-19 buscó explorar diferentes dimensiones biopsicosociales con el fin de identificar áreas y actividades consideradas importantes para la vida y la dignidad de una persona con discapacidad: relación con el/la cuidador/a (o grupo de cuidadores), trabajo, educación, salud, alimentación y acceso de la información.

Los resultados de la encuesta ponen de relieve que la mayoría de las personas con discapacidad que participaron en la encuesta (70,5%) requieren del apoyo de otra persona para realizar actividades de la vida diaria, resaltando la dependencia de estas personas con respecto a sus cuidadores, que en el 80% de los casos son familiares. En cuanto al riesgo de contagio de las personas con discapacidad y de sus cuidadores, el 59% aseguró no contar con otra persona que les pueda cuidar en caso de que su cuidador/a principal sea contagiada, siendo este otro factor que aumenta aún más su vulnerabilidad.

En cuanto al despliegue de acciones específicas, el 80% de las personas encuestadas declara no conocer medidas o iniciativas públicas para apoyarles a hacer frente a la pandemia. De los que contestaron que “sí” conocían de tales iniciativas, el 48% calificó estas medidas de insuficientes. De entre las medidas que sí se conocen, el 59% serían medidas nacionales y solo el 29% medidas impulsadas por autoridades locales. En lo que respecta al acceso a la información, 68% afirma contar con ella (véase el anexo para mayor detalle sobre los resultados de la encuesta).

En síntesis, los datos obtenidos por la encuesta de ONG Inclusiva sobre discapacidad y COVID-19, junto con lo expuesto por los panelistas, resaltan que las brechas que alejan a las personas con discapacidad de la posibilidad de llevar una vida digna han aumentado a raíz de esta pandemia, tanto en sus dimensiones médicas y psicológicas como en las económicas y sociales.

Los Estados y gobiernos locales que priorizan la reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad se encuentran mejor preparados para responder a estas necesidades en tiempos de crisis. Sin embargo, la existencia de disposiciones políticas y legales sobre derechos humanos no garantiza su cumplimiento. Por ello, la pandemia ofrece una oportunidad única para revisar y replantear las políticas públicas para tornarlas más inclusivas, equitativas y garantistas, planteando incluso la necesidad de aplicar cambios en el modelo y los patrones de desarrollo.

La pandemia actual nos ha enseñado que la resiliencia de nuestros países debe ser medida por la forma en que protege a los grupos más vulnerables. No todos los grupos vulnerables son iguales ni tienen las mismas necesidades, retos, oportunidades y fortalezas. La inclusión de las personas con discapacidad en las políticas, planes y procesos de toma de decisión debe contar con el involucramiento activo de las personas con discapacidad, pero también de sus familias, personas y redes de apoyo.

Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de contagio, debido entre otras cosas a la baja accesibilidad de información o forma de interactuar con su entorno. La publicación de la OPS 'Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19' ofrece unas importantes recomendaciones en esta materia, orientadas hacia los diferentes tipos de actores.

Desde la perspectiva de las personas que se encargan de los cuidados, esta pandemia también ha dejado lecciones sobre los beneficios de reconstruir una sociedad que incluya a estas personas. Se trata a menudo de familiares, en gran parte mujeres y madres de familia, que se dedican al cuido de manera de forma permanente y sin remuneración, con el desgaste físico, psicológico y mental que esto supone y aún más durante crisis como la actual.

RECOMENDACIONES CLAVE

¿Qué podemos hacer entonces? Una mirada a propuestas concretas

Para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia desde un enfoque inclusivo y reducir el riesgo en la población con discapacidad, se proponen varias acciones y recomendaciones:

- Para llegar a medidas apropiadas y funcionales, las organizaciones de personas con discapacidad, sus cuidadores y familias, y las organizaciones de la sociedad civil deben ser consultadas e involucradas activamente en todas las etapas de la preparación, la respuesta y la recuperación al COVID-19.

- Los recursos de los Estados, las tecnologías de información, las alianzas y redes de apoyo deben estar disponibles para todas las personas, en coordinación y colaboración para asegurar los derechos, la protección, la dignidad y bienestar de todas las personas sin prejuicios.

- Las comunicaciones y plataformas de información deben ser accesibles, en braille, con subtítulos y con lenguaje de señas para ser inclusivas. Una comunicación que no sea inclusiva, no es comunicación, sobre todo cuando se trata de gestión del riesgo.

- Es necesario producir datos desagregados y geo-referenciados que faciliten una atención más adecuada a la población, permitiendo la flexibilización de los paquetes de protección social, de tal forma que sean inclusivos para las personas con discapacidad.

- Identificar lecciones aprendidas y políticas que promuevan la inclusión universal para garantizar el acceso a los servicios, a las tecnologías de información, a la formación y al empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias, y que las oportunidades de trabajo y educación sean más equitativas.

- Fortalecer el rol de la cooperación internacional para asegurar que los Estados priorizan la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

- **Volver a la normalidad no es suficiente: debemos recuperarnos y (re)construir mejor.**

UNDRR
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

COVID-19 RESPUESTA

ONG Inclusiva

Copyright

©United Nations Office for Disaster Risk Reduction 2020. All rights reserved